

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

INFORME SOBRE DETECCIÓN DE INDICADOR DE FRAUDE (BANDERA ROJA) RELATIVO A LA LICITACIÓN CONSULTORÍA EN LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATION EU, DENTRO DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA. A/SER-032342/2025

En el marco de la ejecución de proyectos financiados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y conforme al Plan de medidas antifraude para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado en Consejo de Gobierno, esta Dirección General de Formación (DGF) ha sido informada sobre un indicador de fraude de los que menciona el citado Plan: *“Presentación de una única oferta anormalmente bajo de proposiciones optando a la licitación”* en relación con el expediente de licitación: A/SER-032342/2025 *“Consultoría en la CAM para diseño e implementación de un PAC (Procedimiento de Acreditación de Competencias Profesionales) en el ámbito de las empresas financiadas por la Unión Europea Next-Generation UE, dentro del marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia” (C20.I01.P01.S11)*

El presente informe tiene por objeto analizar dicha circunstancia, evaluar los riesgos asociados y determinar si existen elementos objetivos que permitan inferir la existencia de irregularidades o indicios de fraude en el procedimiento de contratación.

La concurrencia de un único licitador constituye, conforme al Plan de Medidas Antifraude, un indicador de riesgo potencial, pero no supone por sí misma la existencia de fraude o irregularidad, siendo necesario analizar las circunstancias concretas del expediente.

Tal y como figura en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares el objeto de la presente licitación es:

Servicio de consultoría para definir e implementar un procedimiento de acreditación de competencias profesionales dirigido a empresas con las que la Comunidad de Madrid suscribe convenio que posibilite flexibilidad y adecuación a las necesidades de las plantillas a la vez que estandariza, automatiza y robotiza determinadas fases del procedimiento común abierto a los ciudadanos madrileños de forma individual.

En el diseño de este procedimiento es necesario también definir e implementar un espacio digital que sirva de apoyo técnico al proceso de acreditación, de forma que permita trabajar de forma digital con a todos los actores que van a participar en el procedimiento: Administración, evaluadores y asesores, empresa y plantilla de la empresa

Por lo que el citado objeto requiere que en el mismo se preste tanto un servicio de consultoría que posibilite a la administración *definir e implementar un procedimiento de acreditación de*

competencias profesionales dirigido a empresas, que actualmente no existe, ya que es una novedad normativa que se previó en el artículo 179.6 del Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional: *Las administraciones competentes podrán planificar, de manera coordinada con las empresas, procesos de acreditación de competencias profesionales con carácter masivo para su plantilla*; como el diseño de un espacio digital que posibilite la implementación de este procedimiento novedoso, y en el que participan múltiples actores, con diferente madurez tecnológica: personal de la administración, personal externo habilitado como asesor /evaluador; personal de los departamentos de recursos humanos de las empresas, así como los candidatos en el procedimiento propiamente dichos.

Se es consciente que es un objeto ambicioso, que no puede ser dividido entre diferentes licitadores, como se explicita memoria justificativa en el expediente de licitación, ya que el diseño del espacio digital debe de responder a las necesidades que se detecten en la propia consultoría procedimental, lo que supone que tenga que ser prestado conjuntamente, ya que la presencia de distintos adjudicatarios resentiría técnicamente el objeto del contrato.

Asimismo, se es consciente que el plazo de ejecución previsto supone un esfuerzo. No obstante, el mismo responde a una necesidad, ya que este procedimiento previsto normativamente, empieza a ser demandado por las empresas y la Administración tiene la necesidad de implementarlo a la mayor brevedad. Así señalar que en estos últimos meses se han acercado a esta Dirección General diferentes empresas, instituciones, tanto privadas, como públicas requiriendo la implantación de este procedimiento para sus trabajadores, sirva como ejemplo la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda o el Grupo Inditex con el cual la Comunidad de Madrid ha suscrito convenio para el desarrollo de este procedimiento el pasado 29 de enero.

Indicar que debido al ajustado plazo de la licitación se ha requerido intensidad de personal adscrito al proyecto, conformado por un equipo de 26 personas, respecto de las cuales se ha solicitado roles tipos propios de las empresas de consultoría, de hecho para la valoración económica del expediente el coste de personal requerido se ha referenciado a categorías previstas en el *XIX Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública, registrado y publicado por Resolución de 4 de abril de 2025, de la Dirección General de Trabajo (BOE núm. 92, de 16 de abril)*. Asimismo, reflejar que el único requisito complementario previsto es que como parte del equipo de consultoría se cuente con *dos trabajadores habilitados como asesores o evaluadores de competencias profesionales*. Este requisito en ningún caso supone una limitación a la concurrencia, ya que actualmente y exclusivamente en la Comunidad de Madrid se encuentran habilitados como expertos (asesores-evaluadores) 3.187 personas, numero que se incrementa exponencialmente si se tiene en cuenta el número de asesores o evaluadores habilitados por las distintas comunidades autónomas.

En cuanto a lo requerido para el desarrollo e implementación del espacio digital, los requerimientos reflejados han sido los tipos establecidos para la prestación de servicios como es la adaptación al Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), y téngase en cuenta que para la valoración

económica se ha tenido en cuenta los precios reflejados en la memoria económica de otro expediente de licitación, concretamente *Creación y puesta en funcionamiento de una plataforma para la gestión de la formación y los usuarios, dinamización de la formación y acompañamiento en el aprendizaje dentro del Plan de Capacitación Digital de la Co-munidad de Madrid, en el marco del Componente 19 "Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills)", con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España - financiado por la Unión Europea – Next GenerationEU con número de expediente A/SER-031456/2023, convocado por la Consejería de Digitalización.*

A la vista del análisis realizado, se concluye que no existen elementos objetivos que sustenten la existencia de irregularidades o indicios de fraude en el procedimiento de contratación analizado.; si bien es cierto, que el ambicioso objeto del contrato, el plazo de ejecución del mismo, y la intensidad del equipo solicitado puede suponer desafíos en la participación en la presente licitación, que las entidades licitadoras deben de valorar. No obstante, como se ha detallado se constata que la presente licitación respeta los principios de libre concurrencia, igualdad de trato y transparencia, habiéndose definido los pliegos conforme a necesidades objetivas, justificadas y alineadas con el interés público.

En particular, no se aprecia que la licitación contenga especificaciones técnicas, criterios de solvencia o condiciones de ejecución adaptadas a las cualificaciones de un licitador determinado, ni que el objeto del contrato haya sido definido de manera que únicamente pueda ser cumplido por un único operador económico.

En consecuencia, el indicador de riesgo detectado queda adecuadamente justificado y mitigado, no apreciándose la concurrencia de circunstancias que aconsejen la adopción de medidas adicionales en materia de prevención del fraude.

Madrid, a la fecha de a la firma

LA DIRECTORA GENERAL DE FORMACIÓN

Firmado digitalmente por: MARIN GARCIA MARIA MERCEDES
Fecha: 2026.02.26 16:11